

El presente documento en su versión original contiene datos personales y elementos de carácter confidencial. En ese contexto, es oportuno proteger la esfera privada de sus titulares. En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se extiende la siguiente versión pública:

27-SI-2018

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL:** San Salvador, a las quince horas del diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

El presente procedimiento inició el nueve de julio del presente año, por medio de solicitud de información presentada por la señora [REDACTED]

**Considerandos:**

**I. Relación de los hechos.**

La ciudadana [REDACTED], solicitó información de este Tribunal, así: "certificación del expediente 49-A-16, de la cual es investigada".

Se determinó que, por su naturaleza, la información es administrada por el Coordinador de Trámite Administrativo de la Unidad de Ética Legal de este Tribunal, por lo cual, le fue requerida mediante memorando 33-UAIP-2018, de fecha doce del presente mes.

En ese orden, la unidad administrativa, trasladó la información solicitada por la señora [REDACTED], para su respectiva certificación.

**II. Fundamentos de Derecho.**

El artículo 6 de la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresar y difundir el pensamiento, siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. Por otra parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señalan que el acceso a la información es una herramienta eficaz para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción; por lo cual es obligación del Estado garantizar su libre y democrático ejercicio.

En el marco de la competencia subjetiva, los artículos 50 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP-, confieren a los oficiales de información las potestades requeridas en el tratamiento de las solicitudes de información.

Además, los artículos 36 y 66 de la LAIP, 50, 52, 54 y 55 de su Reglamento indican los requisitos que debe contener la solicitud de información, así como el análisis de admisibilidad que se hará sobre la misma, debiendo en todo caso fundar y motivar la decisión adoptada a fin de evidenciar la certeza de lo afirmado - *Ratio iuris* -.

En el caso particular, luego de verificada la clasificación de la solicitud de la ciudadana [REDACTED], el análisis de la misma revela que ha cumplido los requisitos de admisión y que su contenido no constituye información reservada ni confidencial, por ser parte activa en dicho procedimiento. Razón por la cual es procedente acceder a lo solicitado.

Por tanto, con base en los artículos 1 y 6 de la Constitución, III de la Convención Interamericana contra la Corrupción, 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 .1 de

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 19 letras t) y g), 20, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 50, 62, 65, 66, 70, 71, 72 de la LAIP, 40, 50, 54 y 55 de su Reglamento, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Tribunal de Ética Gubernamental, **RESUELVE:**

a) *Admitase* la solicitud de información presentada por la señora [REDACTED]

b) *Concédase el acceso a la información* a la señora [REDACTED] y en consecuencia *entreguesele* lo solicitado.

*Notifíquese.*

  
**Wilber Alberto Colorado Servellón**  
**Oficial de Información**  
**Tribunal de Ética Gubernamental**

